

Editorial

A un año del megaincendio: decepcionante balance en reconstrucción

Mañana se cumple un año desde que tuvieron lugar los devastadores incendios que afectaron a distintas localidades de la Región de Valparaíso, entre ellas Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. El saldo fue desolador: 137 fallecidos, más de 3 mil viviendas dañadas o destruidas, y miles de hectáreas quemadas, provocando daños incalculables.

Fue una de las mayores tragedias que ha visto el país en décadas, y ante ello el gobierno asumió un compromiso de reconstrucción y apoyo a las familias. Pese al ímpetu inicial con que se emprendió esta tarea -incluso se nombró a la ministra Camila Vallejo como "enlace" con la Región de Valparaíso, función que desempeñó apenas un par de meses-, incluso con dos ministros sectoriales a cargo de estas responsabilidades -Carlos Montes, de Vivienda, y Javiera Toro, de Desarrollo Social-, los resultados hasta aquí son decepcionantes, particularmente en lo que toca a la reconstrucción de casas, lo que claramente representa un fuerte traspíe para el gobierno del Presidente Boric.

Esta semana la propia Moneda ha reconocido que no se está conforme con el estado de avance de la reconstrucción. La ministra del Interior señaló que "como gobierno nosotros no estamos conformes con lo alcanzado hasta ahora", señalando que respecto de los ministros encargados se fijaron una serie de compromisos y tareas que ellos mismos irán informando. Ambos secretarios de Estado han admitido esta realidad, si bien atribuyen el menor ritmo de lo esperado a una serie de factores, entre ellos trabas jurídicas o las dificultades que imponen las complejas condiciones geográficas en que se emplazan algunos sectores afectados.

Según las cifras del Ejecutivo, al mes de diciembre el plan de reconstrucción llevaba un avance del 26%, donde el área de mayor rezago es la construcción de viviendas definitivas, lo que ha llevado a la queja pública de los alcaldes y a la movilización de los damnificados. El propio gobernador regional ha hablado abiertamente de un "fracaso". De las 3.047 viviendas con algún tipo de daño, correspondientes a familias hábiles de subsidios pertenecientes a sectores regulares de las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, existen 591 a quienes ya se les ha asignado un subsidio habitacional en las distintas modalidades para este proceso de reconstrucción. Cuarenta familias cuentan con solución definitiva al ser incorporadas en proyectos de integración social y territorial,

y solo un 35% de las familias hábiles con daño no reparable cuentan con un proceso de reconstrucción en desarrollo. También se ha conocido que solo se habría gastado una fracción del Fondo Transitorio de Emergencia creado para enfrentar las consecuencias del megaincendio.

No hay duda de que reconstruir zonas devastadas por incendios resulta una tarea de especial complejidad, pero al cabo de un año las familias afectadas y el país tienen derecho a esperar resultados mucho más robustos, sobre todo en lo que dice relación con las viviendas. Si bien la ministra Toro ha señalado que el cumplimiento del plan de reconstrucción al cabo del primer año está dentro de lo que se había previsto, parece claro que las metas no fueron demasiado exigentes.

Al respecto, inevitable resulta comparar con lo que fue la experiencia de reconstrucción tras el terremoto de 2010, bajo la presidencia de Sebastián Piñera, donde resultaron dañadas o destruidas más de 222 mil viviendas; a pesar de la vastedad del daño, al cabo de cuatro años más de 200 mil habían logrado una solución, lo que prueba que el país posee capacidades para emprender tareas a gran escala, pero para ello es fundamental implementar altas dosis de gestión, que es lo que en el caso de estos siniestros ha faltado, volviendo a poner de relieve que es uno de los flancos más débiles de esta administración.

Queda claro que La Moneda no pretende por ahora hacer efectiva ninguna responsabilidad política por estos decepcionantes resultados, pero tampoco hay claridad de qué metas y plazos se ha puesto para los meses venideros. Sorprende que el propio Mandatario no haya sido más activo en evaluar la marcha de este plan, considerando que en su última cuenta pública -en junio pasado- ya había hecho presente que no estaba conforme con la velocidad de los avances en la reconstrucción.

Todavía está por despejarse el rol que le cupo a distintos organismos públicos en la gestión de la emergencia, la cual ha sido objeto de cuestionamientos. Esto se ha visto refrendado no solo por el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, sino también por un reciente informe de Contraloría, en el cual se detectaron una serie de fallas que presentó la Conaf; también debe despejarse el actuar de Senapred, por los problemas que hubo en el proceso de evacuación o las tardías alertas que recibió la población. Ciertamente este primer aniversario está dejando un sabor amargo y muchas interrogantes aún en pie.

La lentitud en el avance de esta tarea, reconocida por la propia Moneda, vuelve a poner de relieve los problemas de gestión del gobierno y la ausencia de responsabilidades políticas.